

DISYUNTIVAS DISCURSIVAS EN TORNO AL ACTUAL MODELO SOCIO-ECONÓMICO

*Olga Natividad Bracco
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)*

A partir de una extensa revisión bibliográfica que busca analizar los componentes, limitaciones y contradicciones del actual modelo socio-económico, así como también las continuidades y rupturas generadas con relación al modelo de los años noventa, se pueden observar una serie de disyuntivas discursivas que establecen las coordenadas de la actual controversia en torno a la definición pública de la realidad socio-económica del país, fraccionando el campo político discursivo en diferentes posiciones enunciativas.

El análisis de las concepciones halladas en el material bibliográfico estudiado permite distinguir los elementos que configurarían los horizontes probables de sociedad imaginados por enunciadores relevantes en el actual estado de la disputa política nacional, dando cuenta de las complejas relaciones entre los discursos y el poder.

En una mirada superficial, los actuales discursos que hegemonizan la esfera público-política parecen recaer en una polarización reafirmada constantemente por acólitos y detractores del modelo socio-económico en la clave oficialismo (nacional popular) versus oposición (liberal o conservadora). Sin embargo, si se amplía y profundiza el panorama de enunciadores, es posible construir cuatro tipos ideales de concepciones que, a su vez, pueden combinarse de forma matizada en diferentes posiciones enunciativas: 1) los funcionarios/militantes, intelectuales y medios de comunicación oficialistas, persiguiendo un horizonte de sociedad de trabajo o de modelo económico progresista, caracterizan el actual modelo como nacional-popular, de inclusión social, que incentiva al sector industrial al estilo keynesiano, en contraposición al modelo de valorización financiera de los años de la convertibilidad (1); 2) otros desde una mirada más crítica y menos optimista y abogando por un horizonte de izquierda, catalogan al modelo como neo-desarrollista, ya sea este de base agraria y extractivista, o de base industrial, o bien una mezcla de ambos, que genera diversos grados de inclusión/exclusión de los sectores populares pero sobre la base de la consagración de una fuerte brecha de desigualdad (2); 3) un tercer grupo, más intransigente, con un horizonte de izquierda revolucionario, plantean que no ha cambiado nada (o lo ha hecho muy poco) desde los años de la convertibilidad y que estaríamos en presencia de un modelo extractivo exportador con distribución regresiva del ingreso que profundiza el neoliberalismo de los años noventa (3); por último, 4) existe otra posición enunciativa de matriz liberal que critica el intervencionismo kirchnerista, denominándolo peyorativamente como “populista” y abogando por un horizonte de sociedad de mercado (4).

Reconociendo la diversidad de concepciones político-ideológicas que operan en un campo político específico y el papel de estas en la configuración de diferentes discursos que enmarcan la comprensión del presente, seleccionando y ordenando de manera diversa diferentes elementos de esa realidad, la presente propuesta de trabajo pretende centrarse tanto en el

análisis de la controversia entre esas cuatro posiciones enunciativas descriptas, buscando puntos de convergencia y divergencia. Partimos de la base de que la comprensión de los elementos político-discursivos que configuran el debate político puede resultar muy útil a la hora de buscar comprender la actual dinámica política nacional y lograr un conocimiento más acabado de las verdades y los proyectos sociales en disputa.

Con el objeto de reconstruir el contexto significativo de esta controversia seguiré el siguiente esquema: en primer lugar, un análisis de las políticas fundacionales del modelo post-crisis 2001; y, en segundo lugar, una exploración preliminar de las disyuntivas entre las diferentes posturas discursivas respecto a los cambios, continuidades y tensiones del modelo actual, separando el análisis por políticas macroeconómicas generales y específicas que atañen al comportamiento de diferentes sectores (agrario, industrial, minero, hidrocarburífero, laboral, financiero, etc.).

1. La expresión de un nuevo modelo

Previo al colapso del modelo de valorización financiera se venía definiendo una nueva articulación del bloque de poder. Al principio, existieron discursivamente dos fracciones de las clases dominantes que defendieron determinados intereses: por un lado, surgió la fracción devaluacionista que favorecía sobre todo a la producción primaria (agro, petróleo, gas y minería) y a la gran industria con capacidad exportadora; y, por el otro, la fracción que propuso la dolarización de la economía, favorable al sector financiero local y a las empresas privatizadas. La primera posición, propiciada por el llamado “grupo productivo” (5), fue la que ganó la disputa ideológica, política y económica.

En detrimento de las empresas públicas privatizadas y el capital financiero, los sectores exportadores (industrial, extractivista y agrario) pasaron a liderar la nueva recomposición del bloque de poder, acompañado por el apoyo activo de las fracciones capitalistas mercado-internistas y también del sector financiero que, aunque se vio perjudicado, aseguró el rescate de sus pasivos.

Siguiendo a Forcinito y Tolón Estarellés (2009) y Varesi (2010), existieron una serie de políticas fundacionales que hicieron a la configuración del modelo de la post-convertibilidad. La primera de ellas fue la declaración del default de la deuda pública con los acreedores privados (realizada por Rodríguez Saá). La segunda fue la devaluación (realizada por Duhalde) que se legalizó a principios del 2002 con la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Debido a la presión que ejercieron el grupo productivo, las empresas privatizadas y la banca extranjera, que aducían no poder pagar sus deudas, se llevó a cabo una pesificación asimétrica de deuda privada que implicó una estatización indiscriminada de esta. Además, a través de una renegociación y congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, estas se pesificaron y desindexaron impidiendo que el costo acompañara los vaivenes del valor internacional del dólar. Otros aspectos que se implementaron fueron un nuevo acuerdo con el FMI, el “salvataje al sector financiero” y las retenciones. En definitiva, el nuevo tipo de cambio generado por la maxidevaluación redistribuyó los excedentes y, de esa manera, relanzó la

competitividad internacional de los productos exportables, permitió una baja en los costos empresarios (salarios reales e insumos en dólares), impulsó la sustitución de importaciones y sacó del estancamiento y retroceso a sectores industriales locales que producían para el mercado interno (Orovitz Sanmartino, 2007).

En el plano social, durante todo el gobierno de Duhalde, existió un clima de movilización popular y fuerte cuestionamiento al modelo económico vigente. Mediante un acuerdo multisectorial, se instrumentó un vasto plan social —el programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados— para paliar la situación de desolación de los más perjudicados del modelo de la convertibilidad. Sin embargo, cabe destacar que los salarios y las jubilaciones se mantuvieron congelados, lo cual empeoró la situación social. Así las cosas, en este contexto pueden citarse los asesinatos de Kosteki y Santillán que tuvieron como consecuencia directa la aceleración de las elecciones para entregar el poder presidencial antes de lo previsto.

2. Disyuntivas en la “Era K”: rupturas, continuidades y desequilibrios en materia económica

A partir del momento en que se instauraron los Kirchner en el poder, con una legitimación inicialmente baja, la aceptación social fue creciendo vertiginosamente a medida que se fue gravitando una especie de transversalidad que permitía el equilibrio dinámico de diversos sectores con intereses contrapuestos.

Algunas destacables estrategias discursivas fueron instalarse como críticos al neoliberalismo y fortalecer los derechos humanos en el país, algo que ningún otro gobierno constitucional previo había asumido como importante. En esta misma línea, se reemplazó y se enjuició políticamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que por acción u omisión venían contribuyendo a mantener impunes los delitos de lesa humanidad y los de naturaleza económica asociados al manejo de los asuntos públicos, como las privatizaciones (Forcinito y Tolón Esterelles, 2009).

Ahora bien, el análisis del Kirchnerismo en materia económica no goza de simplicidad. Al respecto, los autores consultados organizan la información sobre esta época de cuatro maneras diferentes. 1) Desde el punto de vista meramente económico, algunos dividen al comportamiento de la macroeconomía en tres etapas bien diferenciadas: la primera, caracterizada por un proceso de expansión económica 2002-2007; a la cual sigue una segunda etapa de desaceleramiento, producto tanto de causas endógenas como exógenas (la crisis internacional de 2008 y sus efectos); y una última, definida por la reactivación económica que se da desde 2009 hasta la actualidad, aunque cargada de tensiones que se van exacerbando a medida que pasa el tiempo. 2) Otros realizan una presentación de la información por políticas específicas que atañen a diferentes sectores: agrario, industrial, minero, hidrocarburífero, laboral, financiero, etcétera. 3) Otros definen las continuidades y rupturas en general. Aquí se intentará realizar un *mix* ordenado de los tres tipos de recorridos para enriquecer el debate de una manera ecléctica y para pensar las relaciones entre el discurso y el poder de forma más acabada.

2.1 Variedad de posturas

En general y como ya he mencionado, como existe tanta diversidad de posturas acerca del análisis del período en cuestión, realizaremos un repaso de las principales conclusiones generales de los autores.

Svampa, integrante de Plataforma 2012, señala que más allá de las drásticas transformaciones en las últimas décadas, en la Argentina actual se han configurado tres «modelos de desarrollo», dos de ellos de marcada continuidad con los noventa. Las altas tasas de crecimiento económico y el superávit fiscal, se deben en gran medida a la recuperación de la industria, post-devaluación, así como a la expansión vertiginosa del modelo extractivo-exportador y la consolidación de un nuevo modelo agrario (Svampa, 2008). Asimismo, piensa que “asistimos también al acoplamiento entre neo-desarrollismo extractivista y progresismo de izquierdas [y centro-izquierdas] gobernantes” (Svampa, 2010).

Castellani (2010) indica que en la Argentina se vienen produciendo alternativamente ciclos de crecimiento y decrecimiento del producto y la inversión, acompañados de una persistente salida de capitales y escasas articulaciones de las empresas con el sistema nacional de innovación, lo cual obstruye la efectivización de un proceso de desarrollo sostenido. La persistencia de “ámbitos privilegiados de acumulación” no estratégicos (lo que comúnmente es conocido como “capitalismo de los amigos”) es una particular forma de articulación entre los grandes empresarios y el Estado que trae aparejado vastos problemas para efectivizar dicho desarrollo.

Katz (2010), miembro del colectivo EDI (Economistas de Izquierda), señala que si bien el modelo actual puede caracterizarse como neodesarrollista-industrialista y se ha distanciado de todas las vertientes usuales del neoliberalismo, no se ha creado una ruptura radical con la etapa precedente. Tal como lo hace Svampa, afirma que el modelo no introduce cambios sustanciales en el perfil productivo tradicional ya que continúa primando el cultivo agrícola por sobre una esfera industrial subordinada. Tampoco se vislumbran modificaciones en la inserción internacional.

Tanto Féliz (6) y López (2010) como Orowitz Sanmartino (2010) (también miembro del EDI) y Varesi (2010) inscriben al modelo como más cercano al neodesarrollismo que al neoliberalismo. Aunque los dos primeros también comparten otra idea: la de selectividad estratégica estructuralmente situada (en términos de Jessop, 2008) o de revolución pasiva (en términos de Gramsci). La primera, hace referencia a la forma en la cual las instituciones y aparatos del Estado permiten que determinadas fuerzas sociales utilicen el poder estatal de acuerdo con sus intereses materiales e ideológicos frente a otras fuerzas sociales. A través de esa idea, dicen Féliz y López (2010: 3), “podemos ver cómo ciertas instituciones estatales responden más a los intereses de los bloques de poder, mientras que las políticas sociales y laborales responden en mayor medida a las demandas que el pueblo trabajador dinamiza con sus luchas”. Orowitz Sanmartino (2010: 3) trae a colación algo parecido pero con un enfoque más benevolente con el kirchnerismo, el cree que “el nuevo patrón de acumulación se inscribe

en nuevas instituciones, ideologías y relaciones sociales bajo la forma de un Estado de 'compromiso débil' y que mantiene tantos elementos de continuidad con el esquema neoliberal de mercado, como de ruptura, donde lo importante ya no es la contabilidad de las virtudes y defectos, sino su inscripción dentro de la reconfiguración de la forma-Estado basada en un nuevo bloque de poder y una nueva articulación hegemónica que presupone la inclusión de manera pasiva de intereses y demandas populares expresadas en el 2001 así como en las exigencias de la normalización capitalista". Es un compromiso que obliga a nuevos equilibrios dinámicos, a la negociación, a las medidas contradictorias.

Por su parte, dos textos de Castillo (líder del FIT- Frente de Izquierda de los Trabajadores) y *et al.* (2007, 2009), de clara impronta marxista, señalan que lo que existe es un modelo neodesarrollista de "dólar alto y salarios bajos", caracterizado por un proceso desigual y combinado (mezclando el atraso y el progreso), donde en la cima capitalista se opera con niveles de productividad y competitividad internacional (como ocurre en la agroindustria, la siderurgia, y en parte en la industria automotriz), mientras que la mayor parte de las pymes aprovechan el tipo de cambio para operar en condiciones de baja productividad, algo que no tiene sustento a largo plazo. Al igual que Félix, señala en varias oportunidades que el Estado gobierna para el capital, antes que para los trabajadores.

Todos esos autores se inscriben en la misma línea de crítica al modelo ya que enfatizan sus alcances y límites. Sin embargo, por otra parte, podemos señalar posturas que están a favor del kirchnerismo, y donde aquellos de arriba ven continuidades, tensiones y desequilibrios, estos ven materias pendientes.

Los informes del CYEPIC (2010, 2011) tienen una postura oficialista y hacen mayor hincapié en las virtudes del actual patrón de acumulación que en sus defectos, aduciendo que estamos en presencia de un modelo de desarrollo sustentable y keynesiano, de inclusión social. Por otro lado, Rofman (2010: 2), integrante de Carta Abierta, indica que "a partir del año 2003 y hasta nuestros días, se propone decididamente —con avances y retrocesos, aciertos y errores— desplegar una política económica y social basada en una sociedad de trabajo, inclusiva y con una creciente redistribución progresiva del ingreso. Los logros están a la vista y las asignaturas pendientes no son pocas". Su texto, breve y escueto, señala solo un par de continuidades (como la estructura financiera privada, el sistema de tributación, el uso de los recursos naturales). Lo interesante es que también hace alusión a dos tipos de modelos que pueden ser opciones para el futuro de la economía argentina: un modelo económico progresista o de sociedad de trabajo, al cual estaríamos encaminados si se continúa con este tipo de políticas inclusivas, o un modelo económico conservador o de sociedad de mercado, ya practicado varias décadas atrás.

Un representante de esta última posición enunciativa de matriz liberal que critica el intervencionismo kirchnerista sería el economista Melconian (7) (candidato del PRO), quien señala peyorativamente que la Argentina persigue un modelo populista con cada vez más problemas impostergables y cuya solución, entre otras decisiones políticas, estaría en reducir

gradualmente el financiamiento al fisco y recuperar el superávit primario genuino, trabajando con el reordenamiento del gasto público y con la racionalidad del sistema tributario (8).

Esta caracterización de los modelos posibles en la Argentina de hoy se pueden leer continuamente en entrelíneas en los medios masivos de comunicación, tanto hegemónicos como oficialistas, que operan como grandes constructores de opinión pública. Asimismo, esos contrastes aparecen en un informe muy interesante del CIEPYC (9) (2011) que compara los programas económicos detrás de los candidatos presidenciales de las elecciones de 2011. Se señalan también en Katz (2010), cuando detalla la incongruencia discursiva entre el modelo oficial y el propuesto por la oposición derechista, que a su vez, aparecen como alternativas irreconciliables, y en Svampa (2008, 2010) cuando indica la reactualización de los imaginarios: el neodesarrollismo industrialista ligado a los gobiernos nacional-populares y el imaginario del sector agrario, muy a flor de piel por el conflicto del campo de 2008. Pero en definitiva, siguiendo a Katz (2010: 11), “el dato dominante actual no es el choque entre los dos modelos. Las diferencias de prioridades económicas entre el gobierno y la oposición derechista no siguen una línea nítida”, lo cual hace más complicada la realidad en cuestión.

Cabe destacar que además de esas dos opciones, hay otros escenarios posibles (que no tienen cabida en la opinión pública pero sí en el ámbito intelectual argentino): uno de izquierda intransigente y otro neodesarrollista que puede ser tanto de base industrial como de base agraria, o bien una mezcla de ambos.

2.2. La macroeconomía post-devaluación

Para realizar el abordaje del período utilizaremos como base los informes del CENDA (10) (2010) y el CIFRA (11) (diciembre 2010, mayo y octubre 2011) que son los que mejor sistematizan la información, combinándolos con otros autores que tienen visiones diferentes. Una vez más, la diversidad de posturas persiste también en las diferentes estimaciones que se realizan o en realidad en las conclusiones que se extraen de las estadísticas oficiales.

Ya veníamos diciendo que la política cambiaria es, en esencia, opuesta a la de la década anterior y ello ocasionó una fase de crecimiento y mayor competitividad de la producción industrial. En la actualidad, se apuesta a un tipo de cambio alto y múltiple, lo cual implica un tipo de cambio más alto para la industria (cuyo objetivo es la protección de la competencia externa) y un tipo de cambio más bajo para el agro (utilizando como instrumento a las retenciones), que cuenta con condiciones naturales y externas que lo hacen competitivo de por sí (CIEPYC, 2010).

Según el CENDA (2010) la política cambiaria, junto con los efectos de la crisis sobre el salario y los impuestos al comercio exterior (retenciones a las exportaciones) constituyen los tres pilares fundamentales en los que se apoyó el nuevo esquema. Estos comenzaron a erosionarse a lo largo del quinquenio 2003-2007, exhibiendo sus tensiones internas. Para que ello no se profundizara, el Estado se veía (y se ve) obligado a realizar intervenciones permanentes en el mercado cambiario para frenar la apreciación de la moneda, lo que lo forzaba (y fuerza) a mantener superávit constante en las cuentas públicas para no recurrir a la

emisión de moneda o al endeudamiento. Por otra parte, a medida que la economía y el empleo se expandían, la capacidad productiva requería de nuevas inversiones, a la vez que la reducción del desempleo ponía a los trabajadores en condiciones de obtener aumentos en los salarios reales. En 2007 estaba en juego el verdadero motor de crecimiento, es decir, las ganancias extraordinarias en los sectores más pujantes, sostenidas sobre las transferencias de excedente y los reducidos costos salariales.

Este período (2003-2007) se definió por una triple alianza de intereses: mientras los exportadores (predominantemente primarios) gozaban de la suba de los precios mundiales y el favorable nivel del tipo de cambio, la industria mercado internista crecía como no lo había hecho en décadas. Por su parte, los trabajadores también se beneficiaban. Sin embargo, dicha alianza comenzó a resquebrajarse hacia 2008 ya que comenzó a registrarse una aceleración en los precios internos (inflación) que erosionó sistemáticamente el tipo de cambio real. A ello habría que sumarle el impedimento a aumentar las arcas del Estado mediante las retenciones (pese a que los precios internacionales crecían), producto del conflicto con el campo, como también las causas exógenas representadas por el achicamiento del mercado mundial a raíz de la crisis financiera internacional.

Como resultado de la crisis internacional, entre 2008-2009 la economía y sus índices se desaceleraron, aunque rápidamente (luego de 2009) comenzó un nuevo período expansivo con tensiones cada vez mayores que señalaban que el modelo comenzaba a toparse con sus propios límites.

Según la mayoría de los autores, la única solución a esta situación sería tomar diferentes medidas que en el menor tiempo posible generen un cambio de raíz en el perfil de la estructura productiva nacional y reviertan la dependencia que tiene la industria manufacturera con la política cambiaria. Sin embargo, veamos cómo ese desaceleramiento se resolvió provisoriamente: el quid de la cuestión del modelo siguió estando en el mantenimiento del tipo de cambio real competitivo y múltiple como núcleo central de la estrategia económica. Esto es duramente criticado ya que la economía se basa casi exclusivamente en el mantenimiento del dólar alto, y cada vez pierden más efectividad los intentos por sostenerlo.

La presencia de un recurrente superávit comercial (que ejerce presión sobre el tipo de cambio debido a la abundancia de dólares) y de la inflación, introduce una presión permanente hacia la apreciación cambiaria, y cuando ello sucede regresa la especulación basada en la existencia de elevadas tasas de interés y de un dólar barato, que permite potenciar los beneficios obtenidos al girarlos al exterior, con su secuela de especulación, desindustrialización y fuga de capitales.

Cabe destacar, siguiendo al CENDA (2010), que está en discusión una encrucijada discursiva donde, por un lado, se plantea la “profundización del modelo”; y, por otro, se plantea una salida ordenada del patrón de acumulación de la postconvertibilidad. La salida apreciadora tiene sus seguidores, que la presentan como un remedio para combatir la inflación, pero ello supondría, por un lado, un aluvión de productos importados que erosionaría la sustitución de

importaciones; y, por otro, un regreso a las épocas de empobrecimiento progresivo y de expulsión sistemática del mercado laboral.

En el 2008, la apreciación cambiaria no era la única alternativa posible. La lógica de la política económica empleada hasta entonces indicaba que para continuar con el esquema, ante el incremento de los precios internos, era necesario profundizar la vía de la devaluación. Ello hubiera implicado un traslado de la depreciación a los precios de los bienes transables (inflación cambiaria). Pero para que ello no sucediera, era necesario desacoplar todavía más los precios internos de los externos y poner simultáneamente un techo a los transables, para lo cual se empleaban tanto las retenciones como el control de algunos precios y tarifas. Sin embargo, el conflicto del campo puso freno a la primer medida, y la segunda no conseguía los resultados esperados, con lo cual los precios continuaban en su escalada (CENDA, 2010).

Así las cosas, la protección cambiaria pasó a depender de hechos exógenos como la mejora de la competitividad derivada de la apreciación de las monedas extranjeras, que la crisis mundial fuera pasajera o que se redujeran los precios en las materias primas para evitar que una mayor apreciación destruyera por completo la incipiente industrialización alcanzada. Ello refuerza la idea de Féliz y López (2010) de que estamos en presencia de un ciclo de capital dependiente y periférico, que, sin embargo, deja cierto margen de maniobra a la actuación del Estado. Así, este apeló a herramientas convencionales como el crecimiento del gasto público o la política monetaria expansiva, que inyectó algo de crédito en la economía (CENDA, 2010).

Si bien no se llevó a cabo una nueva devaluación en ese momento, el Estado realiza continuamente pequeñas depreciaciones al tipo de cambio para paliar esa situación, lo cual genera una espiral inflacionaria (12). Ello, como ya vimos, al erosionar el tipo de cambio real (es decir, al apreciarlo) reduce la competitividad de la economía y resulta ser así el talón de Aquiles del modelo. Además de ser, sin duda, el principal problema que golpea especialmente a los sectores sociales más necesitados.

Las causas de la inflación actual, así como su valor real, son materia de debate. El CENDA hace un análisis muy convincente. En primer lugar, expone que la economía ortodoxa suele recurrir a cuatro grandes líneas para explicarla. Una, la teoría monetarista, sostiene que la inflación responde al crecimiento de la oferta monetaria. Otra la atribuye a un crecimiento exagerado de la demanda (de modo que la solución se encontraría en la reducción del consumo y el gasto público). Otra atribuye el aumento de los precios al aumento de los costos salariales, y una última culpa al régimen del dólar alto.

Ahora bien, el CENDA hace alusión a que en realidad el crecimiento de los precios de las *commodities* implica también un aumento generalizado de los precios de los bienes transables (13) (en especial alimentos y materias primas) que se ve amplificado por la política del dólar caro. En primera instancia se trata, entonces, del fenómeno de la inflación importada. Ello luego se transmite a los precios de la industria dirigida al mercado interno a través de las variaciones de costos y, en parte, aprovechando la protección cambiaria y en defensa de los altos márgenes de rentabilidad, del traslado a precios de los salarios que se elevan (ya que los trabajadores ganan capacidad de presión) para compensar el incremento de los bienes de

consumo. Es decir que, si el traslado del aumento de los precios internacionales a los precios internos no puede ser contrarrestado con retenciones (o alguna otra medida estatal como controles de precios), se desprende una cadena inflacionaria: los trabajadores reaccionan defensivamente para hacer subir sus salarios y los empresarios traducen esos costos en nuevos incrementos de precios. Con relación a eso, en la Argentina al no poder efectivizarse un control real de precios (14), los intermediarios de la cadena productiva y los empresarios (pese a seguir teniendo rentabilidades históricamente extraordinarias) aumentan los precios a mansalva sin tener ninguna consideración con el conjunto de los actores socio-económicos.

Ahora bien, volvamos a los índices macroeconómicos y a las continuidades y rupturas:

El Informe de coyuntura N.º 7 del CIFRA (mayo 2011), favorable en general al oficialismo, hace referencia a que el nuevo patrón de crecimiento instaurado en nuestro país no se caracterizó solo por las elevadas tasas de crecimiento (que entre 2002 y 2010 se expandieron a una tasa anual acumulativa del 7,6 %), sino también por un crecimiento diferencial a nivel sectorial. Este informe indica que quienes lideraron dicho crecimiento fueron los sectores productores de bienes, y en particular la industria manufacturera. El CENDA también avala esta conclusión. El informe consta de un cuadro de elaboración propia (basado en información del Ministerio de Economía) de la contribución de las distintas actividades a la expansión de los sectores productores de bienes para el período 2002-2010. El “sector industrial” explica el 56 % del crecimiento, la “construcción” el 28 % (sector más dinámico de la economía en los últimos años), la “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” el 10 % y “otros” (explotación de minas y canteras, pesca, suministro de electricidad, gas y agua) el 6 %. Afirman, de esta manera, que se logró quebrar la tendencia presente desde mediados de los años setenta al desmantelamiento y reprimarización de la economía. Sin embargo, ello se puede poner en duda con lo expuesto por otros autores (básicamente todos aquellos que he señalado como críticos de izquierda) que hablan de la expansión vertiginosa del modelo agro-minero exportador.

En la misma línea señalan como ruptura que en la postconvertibilidad la inversión fue uno de los componentes que traccionaron la demanda agregada, a diferencia de las exportaciones que evidenciaron un mayor dinamismo en la convertibilidad. Eso evidenciaría que el denominado “viento de cola” no explica por sí solo el fuerte crecimiento de la economía. La inversión bruta interna fija (IBIF) se expandió a una tasa anual acumulativa del 17,5 % entre los años 2002 y 2010 y este proceso continuo de inversión permitió expandir sostenidamente la capacidad instalada y, de esta forma, poder mantener elevadas tasas de crecimiento. A su vez, aseguran que este aumento de la inversión estuvo estrechamente asociado a la sensible elevación de la tasa de rentabilidad empresarial, lo cual implicó un techo a la mejora de la estructura distributiva (CIFRA, mayo 2011). Ahora bien, si analizamos el período 2008-2011, la inversión pasa a un segundo lugar y es reemplazada por una mayor contribución a la expansión de la demanda agregada por el consumo privado (CIFRA, 2011).

Haciendo un estudio del balance de pagos, se comprueban otras rupturas importantes y en ello coinciden varios autores. La reversión del déficit estructural de la cuenta corriente es una de

ellas, que pasó a tener un notorio superávit en la post-convertibilidad. A la vez, la cuenta capital y financiera evidenció un comportamiento oscilante en la post-convertibilidad, revirtiéndose de esa forma los sensibles superávits que había registrado en el período previo sostenidos sobre la base del ingreso de capitales y al endeudamiento externo. Se consuma también la recuperación de la cuenta corriente sobre la base de un elevado superávit comercial que se produjo centralmente por un notorio crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (también se incrementaron significativamente las importaciones, aunque en menor medida) (CIFRA, mayo 2011). Además, el auge exportador se sustentó, en general, en un aumento tanto de las cantidades como de los precios (aunque a nivel sectorial las ventas externas presentan comportamientos disímiles).

Otro cambio está representado por la reversión del déficit fiscal: el proceso de desendeudamiento externo, junto con el aumento de los ingresos del Estado posibilitaron el mantenimiento del superávit fiscal. A su vez, en los primeros años de la postconvertibilidad este proceso se reforzó por la contracción que había experimentado el gasto público tras la devaluación.

Otra señal de ruptura es el aumento (entre 2001 y 2010) de la participación de las exportaciones de origen industrial (MOI) en las ventas externas totales, aunque esto tiene que ser matizado dado que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) verifican un aumento aún mayor según el informe de CIFRA (mayo 2011). Una acotación importante que puede realizarse a este análisis es que si tanto para el año 2001 como para el 2010, sumamos los rubros “productos primarios”, “Combustibles y Energía” y “MOA” no estaría cambiando demasiado la reprimarización de la economía, lo que desmiente la tendencia contraria antes citada por estos mismos autores.

Más allá del comportamiento expansivo de la economía a nivel mundial, en términos comparativos, no se produjo un incremento en la participación de las exportaciones argentinas, aunque sí nos favorecen la sensible mejora en los términos de intercambio, el aumento en la demanda mundial de alimentos y el abaratamiento progresivo de los bienes industriales importados por nuestro país que hacen prever el mantenimiento de una tendencia favorable en los próximos años (CIFRA, mayo 2011).

Este informe señala un dato no menor: las renegociaciones y quitas de la deuda externa, y el crecimiento económico posibilitaron no solo una independencia con el FMI, sino también una abrupta reducción del endeudamiento externo del sector público: mientras que tras el colapso del régimen de convertibilidad, este representaba casi el 150 % del PBI, en el año 2010 representaba el 44,6 % (y si se considera el endeudamiento solo con entidades pertenecientes al propio sector público —como puede considerarse la deuda con el ANSES— el endeudamiento alcanzó el 20,9 % del PBI) (CIFRA, mayo 2011). Ello mismo es defendido por el CIEPYC. Ahora bien, eso que podría ser interpretado como una gran ruptura, pierde un poco de validez si resaltamos que en el año 2001 representaba el 53,7 % del PBI y en el año 2000 un 45,7 % (es más, si resaltamos el año previo al comienzo del proceso de crisis —en 1998— representa un 38,2 % del PBI), con lo cual el cambio sería insignificante.

Otra modificación se dio en la estructura de ingresos del Gobierno nacional. Al respecto se pueden hacer varias observaciones. En primer lugar, el aumento del empleo registrado a lo largo de la post-convertibilidad permitió un incremento de los recursos del sistema de seguridad social en el actual modelo. Si observamos la composición de los recursos tributarios entre el 2001 y el 2010, la variación de esta dimensión fue de un 6,4 %: pasó de representar un 18 % a un 24,4 %, respectivamente. Por su parte, los recursos provenientes del comercio exterior (a través de las retenciones a las exportaciones) pasaron de representar un 3,6 % de los ingresos totales a un 13,9 % en 2010. Si bien lo que aporta el IVA se redujo en un 6 % respecto a 2001, sigue teniendo un peso preponderante en el total (representa el 28,4 % del total de los recursos tributarios). Quizá por eso sea que ningún gobierno se arriesga a realizar una modificación progresiva del sistema de tributación. Otra señal de que el sistema actual sigue siendo regresivo es la disminución (de un 3,9 %) de la participación del impuesto a las ganancias (la representación actual es del 18,7% del total) (CIFRA, mayo 2011).

Entre 2002 y 2010 se crearon a nivel urbano más de cuatro millones de puestos de trabajo. Afortunadamente, la tasa de empleo no solo recuperó los valores registrados durante la fase expansiva del régimen de convertibilidad, sino que también superó los máximos históricos registrados a mediados de los setenta. El incremento en el nivel de empleo fue acompañado además por una aguda contracción en la tasa de subocupación (pasó de 19,9 % a 8,4 %) y en la tasa de desempleo, que posibilitó una significativa recuperación del empleo pleno. Aquí tienen protagonismo los sectores productores de bienes, quienes lideraron el crecimiento del empleo registrado. Por consiguiente, ello también permitió que se contraiga el empleo no formal, el cual pasó de representar a un 49,2 % de los asalariados en 2002, a un 35,7 % en 2010. Sin embargo, vale aclarar que este dato de precariedad e informalidad, permanece en niveles elevados y similares a los verificados a mediados de la década del noventa (CIFRA, mayo 2011) (15).

Si bien se verificó una notoria disminución de la pobreza y la indigencia entre los años 2003 y 2006, desde el año 2007 el nivel de dichas variables habría disminuido solo levemente. Sin embargo, a lo largo del último año se verificó una disminución en ambas variables (CIFRA, 2011).

Así es que es muy importante que podamos reconocer y aplaudir muchas medidas que dan cuenta de un claro corte intervencionista que puede verificarse en diferentes políticas fiscales, laborales, monetarias y financieras y que pretenden subordinar la economía a la política, entre ellas, la cesación de pagos y posterior reestructuración de la deuda, la instauración de planes masivos como la Asignación Universal por Hijo, las políticas de ingresos, paritarias, la aparición (moderada) de las retenciones, la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones junto a los dos aumentos por año, las escasas (y poco estratégicas) re-estatizaciones y “argentinizaciones” —AySA, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, YPF— la creación de empresas nacionales —ENARSA—, la recuperación de la política de emisión monetaria y supervisión de egresos e ingresos de capitales, etcétera. Pero, sin embargo, otras políticas resultan más cuestionables. En primer lugar, la política macroeconómica no es la única que

impone desequilibrios al patrón de acumulación. Al respecto, la mayoría de los autores consultados rescatan varios problemas-continuidades que se desprenden de esa articulación: Estamos en presencia de una exacerbación de la concentración, centralización y oligopolización económica y de un gobierno que es proclive a incentivar un “capitalismo de los amigos”. Asimismo, la extranjerización de la economía en general, pero también de la cúpula empresarial industrial (el caso de las transnacionales brasileñas es paradigmático), tiene como efecto directo la pérdida de “decisión nacional” en la definición de cuestiones estratégicas para el rumbo socioeconómico del país. Según Castillo y Lizarrague (2009:11), “a pesar de las tantas argentinizaciones, y de la retirada del capital imperialista en ciertas empresas de servicios que habían sido privatizadas, la proporción en la extranjerización se ha mantenido de 2002 a esta parte (...). A fines de 2007 la foto seguía siendo la misma que la de fin de siglo: dos tercios de la cúpula empresaria son extranjeras”.

Siguiendo a estos mismos autores, a su vez, se generan transferencias constantes y progresivas de ingresos del sector público al capital concentrado local y multinacional, entre ellos el sector transporte y el energético, ya sea mediante obras públicas o mediante diferentes subsidios directos e indirectos. Ello genera que el capital extranjero se concentre en ramas estratégicas: minería, petróleo, gas, energía eléctrica, automotrices y autopartes.

Pese a la notable creación de puestos de trabajo, al restablecimiento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y a una notoria recuperación del poder adquisitivo del salario (vía paritarias y negociaciones colectivas, algo impensado en años anteriores), los salarios reales en la Argentina continúan siendo relativamente bajos en comparación con la etapa de sustitución de importaciones o con la convertibilidad (16). En la misma línea puede señalarse que aunque haya habido enormes aumentos en las pensiones y haberes jubilatorios (y que lo sean por decreto dos veces al año), así como también una incorporación de dos millones de beneficiarios que estaban fuera del sistema, el ingreso que perciben se ve corroído continuamente por la inflación.

Según Castillo y Lizarrague (2009), los ingresos fiscales solo cubren el gasto público gracias a la utilización de los fondos del ANSES luego de la nacionalización de las AFJP, con lo cual el Estado volvería a gastar los fondos jubilatorios para financiar a los capitalistas. Ahora bien, para matizar un poco esto, otros personajes no ven ello como un problema. Al respecto, habría que analizar, teniendo en cuenta el contexto histórico argentino, si no es más productivo endeudarse con organismos públicos antes que con fondos extranjeros (a pesar de que el haber jubilatorio debería aumentarse).

En cuanto a la cuestión de la desigualdad social también hay posiciones encontradas. En general podríamos asegurar que pese a que se logro una reversión a esa trayectoria negativa, aún se está lejos de alcanzar los niveles de equidad de la etapa sustitutiva. Asimismo, si se comparan los ingresos de los trabajadores con los obtenidos por las grandes empresas, se verifica una transferencia de ingresos del trabajo al capital que no ha podido revertirse.

Otras políticas continuistas obedecen a la conservación del esquema de servicios públicos privatizados, la descentralización provincial de los servicios educativos y de salud, un sistema

de tributación regresivo (excepto por las retenciones), la orientación agro-minera exportadora y la falta de control estatal efectivo en algunos ámbitos (precios, informes ambientales de empresas que explotan recursos naturales, transporte, etc.).

Asimismo, el patrón actual de acumulación permite una sustantiva mejora de las utilidades de las grandes empresas que no se traducen en un incremento sustantivo del acervo productivo local y por el contrario, produce que gran parte de esos activos líquidos se fuguen progresiva y constantemente hacia el exterior. De hecho, esto se verifica en el incremento de empresarios convertidos en rentistas financieros, inmobiliarios o terratenientes (Castellani 2010).

Todo ello da cuenta de la inexistencia de una clase capitalista disciplinada y comprometida con el desarrollo nacional (burguesía nacional en los términos establecidos por Poutlanzas) que se mantiene invariable en buscar altos beneficios con baja inversión (por ejemplo en sectores que generan poco valor agregado, en sectores con ventajas comparativas naturales o que están subsidiados por el Estado). Con relación a ello, Katz (2009) señala que la principal restricción del modelo no es solo la falta de inversión, sino también en el destino de las colocaciones: el nuevo capital se concentra en sectores de exportación o construcción y no en las áreas claves de la producción industrial. En vez de propiciar avances en la producción por cuenta propia, los capitalistas pretenden renovar sus lucros con devaluaciones que costea toda la población.

De esta manera, podemos señalar que la sobreexplotación de los recursos naturales es una constante en nuestro país. Aprovechando las condiciones naturales de la Argentina (teoría de las ventajas comparativas), los sectores agrarios siguen convalidando que la inserción productiva del sector exportador no debe ser modificada y que la distribución regresiva del ingreso, los bajos salarios y la desocupación son un dato "normal" (Ortiz y Schorr, 2007). Svampa (2008) piensa que las propuestas reformistas del gobierno de los Kirchner han sido de corte más modesto y claramente continuista en lo que se refiere al nuevo paradigma agrario como a la explotación de los recursos naturales.

En lo tocante al sector minero, según Svampa (2010), lo paradigmático es que a partir de 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, se aprobaron una batería de leyes nacionales (17), cuyo modelo de transnacionalización encontró continuidad en la política de Néstor Kirchner, quien en 2004 declaró al plan minero nacional un «objetivo estratégico» y avanzó incluso en la exención total de IVA para la minería y otros puntos estratégicos para el desarrollo del sector. La discusión de este tipo de modelo de desarrollo ha sido polémica, con lo cual se ha abierto una verdadera guerra de discursos. Por un lado, funcionarios oficialistas aceptaron pasivamente y sin ningún control estatal los informes ambientales que hacen las propias empresas; y, por el otro, los pueblos originarios y los habitantes de las zonas aledañas perjudicados, junto con intelectuales y ambientalistas, alegaron la violación de los derechos humanos (como el derecho a la vida y a un ambiente sano) y de los derechos sociales (como se vislumbra por las duras represiones de las policías provinciales hacia las protestas y la judicialización de actores sociales).

Esta misma situación respecto a la legislación, transnacionalización y bajas regalías se repitió también en el sector hidrocarburífero hasta la reciente compra del porcentaje mayoritario de

YPF. En primer lugar, el comportamiento de las empresas privadas había sido vergonzoso: abandonaban toda responsabilidad exploratoria y se dedicaban exclusivamente a la extracción acelerada de los recursos naturales.

3. Reflexiones finales

En las páginas anteriores, se ha podido evidenciar la variedad de interpretaciones sobre la realidad socio-económica argentina y los criterios de verdad que estas pretenden construir, de ahí la complejidad en la comprensión de las características del modelo.

Sin embargo, en general, todo ello da cuenta de que la encrucijada actual presenta la necesidad de enfrentar varios desafíos que permitan que los índices sociales y económicos puedan sostenerse y mejorarse en el largo plazo. De esta forma, como principal medida resulta imprescindible meterse de lleno en la discusión de una reforma del perfil productivo de la estructura argentina que posibilite el desarrollo de una industria nacional que genere un proceso de creación de empleo formal y digno. Para realizar aquello, se plantea la necesidad ineludible de poner límites a la concentración, centralización y extranjerización de la economía, y el surgimiento y la construcción de un empresariado con conciencia nacional que asuma inversiones más riesgosas a largo plazo. Siguiendo a Castellani (2010) deberían favorecerse ámbitos de acumulación estratégicos y profundizar una batería de políticas que apunten a mejorar la situación actual.

Respecto a la intelectualidad argentina, considero que tendría que existir una autocrítica profunda respecto a cómo se aborda la problemática socioeconómica sin proponer complementariamente estrategias de acción concretas. Creo fervientemente que resulta imprescindible ponerse a la altura del campo político tanto para generar soluciones viables, como para entender cómo se puede convivir con las contradicciones que conlleva el ejercicio del poder. Ello a su vez, haría más enriquecedor el aporte.

Notas

(1) Esta postura está identificada tanto con los funcionarios políticos oficialistas como con los intelectuales de “Carta Abierta” (Alejandro Rofman, 2010/ María Pía López), miembros del CIEPYC, economistas del “Plan Fénix” (Ferrer).

(2) Esta posición amalgama a los intelectuales de “Plataforma 2012” y a los Economistas de Izquierda (EDI). Entre ellos, Lozano (citado en Rofman 2010), Svampa (2010), Castellani (2010), Orowitz Sanmartino (2010), Katz (2010), Ortiz y Schorr (2007), Varesi (2010).

(3) Se identifica principalmente con el “Frente de Izquierda Nacional”, Christian Castillo (2007, 2009).

(4) Esta posición se relaciona con partidos políticos determinados: PRO, Coalición Cívica, Peronismo Disidente. Entre los intelectuales podríamos citar a Tomás Abraham, Carlos Melconian, periodistas emblemáticos del diario *La Nación* y *Clarín*, etcétera.

(6) Félix es un economista de izquierda que participa del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO). También es militante del Frente Popular Darío Santillán.

(7) Durante los noventa integró la Gerencia de Investigaciones Económicas y fue subgerente del Área Externa del Banco Central, desde donde participó de las negociaciones por la deuda externa argentina.

(8) Notas en el suplemento económico del diario *La Nación* (www.lanacion.com.ar).

(9) El CIEPYC es el Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP). Es un centro de estudios constituido por un grupo de docentes e investigadores formados en la UNLP y con estudios complementarios de otras universidades y del exterior (www.ciepyc.org).

(10) El CENDA es el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, constituido por un grupo de jóvenes investigadores con formación en economía política. Se propone contribuir al desarrollo de la sociedad argentina a través de la producción académica, crítica e independiente, integrando la discusión teórica con el análisis de la economía nacional (<http://cenda.org.ar>). Entre los integrantes del consejo de redacción están los economistas renombrados Emmanuel Agis, Axel Kicillof y Cecilia Nahón.

(11) El CIFRA es un centro de estudios y formación en temáticas vinculadas con el desarrollo económico, la evolución del mercado de trabajo y las problemáticas sociales. El objetivo de sus estudios es aportar elementos que contribuyan a realizar una síntesis entre la teoría y la práctica en los Ámbitos sindical y político. El Centro se encuentra vinculado a organizaciones gremiales adheridas a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), así como a otros centros de estudios. Su Consejo Directivo está conformado por representantes de los sindicatos participantes y por investigadores del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO y del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) (<http://www.centrocifra.org.ar/>).

(12) Al respecto, es necesario hacer una acotación: aunque pareciera que el índice aumenta vertiginosamente, el valor es históricamente bajo y no se prevén hiperinflaciones como las que ha sufrido el país.

(13) Ello porque los exportadores tienden a querer ganar lo mismo en el mercado externo como interno, por lo que cuando suben los precios internacionales que los benefician, también suben los precios internamente.

(14) Pese a los intentos por controlarlos del paradigmático secretario de Comercio Exterior Guillermo Moreno, quien a su vez, es duramente criticado, tanto por los empresarios y medios de comunicación hegemónicos (Grupo Clarín) que no están contentos con las presiones que ejerce para efectuar un control de precios, como por otros sectores por haber intervenido el INDEC.

(15) Aquí cabe una aclaración: es necesario matizar dichas modificaciones dadas por el Informe de CIFRA (mayo 2011) ya que al basar sus conclusiones en estimaciones comparativas entre los años 2001 y 2010, toman un año particular de crisis, con lo cual se exageran significativamente los cambios. Un análisis de ambas décadas sería imprescindible para comparar con los niveles pre-colapso.

(16) Como bien señala Orovitz Sanmartino, si bien aún no llega a niveles de 1993 (la medición más alta de la década), un pico que fue efímero y tuvo que ver con la recomposición coyuntural del poder adquisitivo luego de la hiper, en los noventa el salario real de la población obrera en activo se mantuvo en niveles relativamente altos por el abaratamiento general de las mercancías que inducía la sobrevaluación del peso, es decir que se logró a costa de un desempleo récord y por lo tanto mediante la disminución de la masa salarial total. A diferencia de ello, en el modelo neodesarrollista el salario real se recupera moderadamente pero acompañado de una creciente población obrera en activo, que eleva su participación en el PBI.

(17) Algunos de las ventajas para el capital transnacional son las siguientes: estabilidad fiscal por treinta años; exención del pago de los derechos de importación; deducción del 100 % de la inversión en el impuesto a las ganancias; exención al descubridor del yacimiento del pago del canon por tres años; en cuanto al pago de regalías, se establece un porcentaje máximo del 3 % al valor boca-mina declarado por la empresa (y del cual descuenta los costos que implica el proceso desde su extracción hasta el traslado para la exportación); exención a las empresas del pago de retenciones por exportaciones, del impuesto al cheque y a los combustibles líquidos. Asimismo, se estableció la no obligación de liquidar divisas en el país.

Bibliografía

- Azpiazu, D. y Schorr, M. (2010). *Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976/2007*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Castellani, A. (2010). "Estado y grandes empresarios en la Argentina de la post-convertibilidad". *Cuestiones de Sociología*, N.º 5-6. Buenos Aires: Prometeo.
- Castillo, C. y Lizarrague, F. (2009). "Hacia el fin de un ciclo." *Lucha de clases*, 9.

- Castillo, C. (2007). "Peculiaridades y contradicciones del actual patrón de acumulación." *Lucha de clases*, 7.
- Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino - CENDA (2010). La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual. La economía argentina en el período 2002-2010. Buenos Aires, CENDA. Capítulo 6: "El nuevo régimen macroeconómico y el sector industrial" // 2010. Notas de la economía argentina N.º 7. <http://cenda.org.ar/>.
- Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación - CIEPYC (2010). "Un balance del gobierno de Néstor Kirchner: descolgando de la pared deudas históricas." *Entrelíneas de la política económica*, 27 // 2011. "Inversión más desarrollo". *Entrelíneas de la política económica*, n.º 29 // 2011 "Piedra libre para los planes económicos detrás de los candidatos". *Entrelíneas de la política económica*, n.º 30 // "Las cuentas fiscales argentinas en perspectiva". *Entrelíneas de la política económica*, n.º 30. <http://www.ciepyc.org/>.
- Centro de Investigación y Formación de la República Argentina CIFRA- CTA (2011). *Informe de Coyuntura N.º 7*. El nuevo patrón de crecimiento. Argentina 2002-2010 // 2010. *Informe de Coyuntura N.º 6* // 2010. *Documento de Trabajo n.º 6: la recuperación industrial durante la post-convertibilidad* // noviembre 2011. *Informe de Coyuntura N.º 8*. <http://www.centrocifra.org.ar/>.
- Féiz, M. (2009). "¿No hay alternativa frente al ajuste?", *Herramienta*, N.º 42. <http://www.herramienta.com.ar>.
- Féiz, Mariano y López, E. (2010). "Contradicciones, barreras y límites en la dinámica del capitalismo periférico posneoliberal desarrollista". *Anuario EDI*, N.º 5.
- Forcinito, K. y Tolón Esterelles, G. (2009). *Reestructuración neoliberal y después...1983-2008: 25 años de economía argentina*. Los Polvorines, UNGS.
- Heredia, M. (2011) "La hechura de la política económica. Los economistas, la Convertibilidad y el modelo neoliberal". En Alfredo Pucciarelli (coord.), *Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Katz, C. (2010). "Los nuevos desequilibrios de la economía argentina". *Herramienta web* 6. Disponible en http://www.lahaine.org/b2-img10/katz_deseq.pdf.
- Orovitz Sanmartino, J. (2010). "Crisis, acumulación y forma de Estado en la Argentina post-neoliberal." *Cuestiones de Sociología*, N.º 5-6. Buenos Aires: Prometeo.
- Ortiz, R. y Schorr, M. (2007). "La rearticulación del bloque de poder en la Argentina de la postconvertibilidad", *Papeles de trabajo*. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, año 1, n.º 2, Buenos Aires, diciembre.
- Rofman, A. (2010). "Los dos modelos económicos en discusión." *Cuestiones de Sociología*, N.º 5-6. Buenos Aires: Prometeo.
- Svampa, M. (2008). "Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo". *Observatorio Social de América Latina*, 24.

Svampa, M. (2010). "Imaginario desarrollista, giro eco-territorial y cuestión ambiental". *Apunte de Cátedra* "Debates Latinoamericanos: Ideas, Escenarios y Categorías en Disputa". UNLP.

Varesi, G. (2010). "La Argentina posconvertibilidad: modelo de acumulación." *Problemas del Desarrollo. Revista latinoamericana de economía*, 161.

Diarios: *La Nación*, *Clarín* y *Página/12*.